

La Junta de Castilla y León se suma a las 35 horas para sus empleados

Castilla y León reclama a Montoro iniciar la "recuperación de derechos" de los funcionarios

MARISOL HERNÁNDEZ

26/01/2017

La Junta de Castilla y León ha reclamado al Gobierno de manera formal la recuperación de la jornada laboral de 35 horas para los funcionarios, después de que Andalucía haya comenzado a implantarla este mes. Por primera vez una comunidad gobernada por el PP realiza esta petición y lo hace, además, junto a los tres sindicatos mayoritarios de la Función Pública -CSI-F, UGT y CCOO-.

El Ejecutivo que dirige Juan Vicente Herrera envió el martes una carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la que solicita que «a la mayor brevedad posible» se hagan las «modificaciones normativas necesarias» para «la recuperación de derechos de los empleados públicos de Castilla y León». La misiva está firmada conjuntamente por el vicepresidente y consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y los tres representantes sindicales. Y es un fruto de un acuerdo para modernizar la Función Pública suscrito en octubre de 2015, pocos meses después de que echara a rodar la legislatura autonómica. En él se incluyeron medidas como la recuperación de la paga extra suprimida y de días libres, que ya han sido ejecutadas y quedó pendiente el compromiso de reclamar la devolución de la jornada de 35 horas. El vicepresidente de Castilla y León, en declaraciones a EL MUNDO, explicó ayer que la petición ha permanecido más de un año congelada por las dos convocatorias electorales consecutivas y que, ahora, una vez que el nuevo Gobierno «ha tomado tierra», han decidido activarla.

En una reunión del martes con los representantes sindicales -de evaluación del acuerdo- elaboraron conjuntamente la carta para Montoro. En ella se insiste también al ministro en la retirada de la tasa de reposición de funcionarios, que permitiría convocar nuevas ofertas de empleo público. Una cuestión que se acordó en la Conferencia de Presidentes celebrada la semana pasada en el Senado, después de que Castilla y León lo planteara en la primera reunión preparatoria.

De Santiago-Juárez sostiene que ahora que «ya se vislumbra la recuperación, aunque sea de manera lenta y difícil» es el momento de «retornar a los empleados públicos el esfuerzo que han hecho». Castilla y León abre de este modo la vía política de negociación con el Gobierno por las 35 horas. Según su vicepresidente, esto es «lo más sensato», en lugar de hacer una norma propia como han hecho otras comunidades, que el Gobierno ha recurrido por inconstitucional. Esto es lo ya ha sucedido en Castilla La-Mancha y en el País Vasco. Y está pendiente de que se confirme la misma actuación en Andalucía.

Por primera vez, una comunidad gobernada por el PP enarbola esta petición

El Gobierno debe decidir en las próximas semanas si recurre al Tribunal Constitucional el decreto de la Junta de Andalucía que ha permitido reponer la jornada de 35 horas, eliminada también mediante un decreto del Gobierno (el de la batería de recortes) en 2012. El momento político actual es distinto. Con el Ejecutivo de Rajoy en minoría, necesitado de apoyos parlamentarios para aprobar los presupuestos -ayer Montoro hizo un nuevo llamamiento al PSOE, sólo 24 horas después de que el presidente rebajara la presión sobre este partido- y con la presidenta andaluza convertida en una figura clave en el Partido Socialista.

Ayer desde el sindicato CSI-F se defendió que el paso que se ha dado en Castilla y León, tratándose de una comunidad gobernada por el PP, es «muy significativo». Entienden que si hay acuerdo entre el Ejecutivo regional y los sindicatos, Hacienda debería permitir que se vuelva a implantar las 35 horas. Este sindicato asegura que ellos van «a intensificar la presión a nivel nacional».

En este nuevo escenario el Gobierno debe ratificar si mantiene su veto a las 35 horas, después de que Castilla y León, gobernada por el PP, le haya pedido recuperarla, y si lleva el decreto andaluz al Constitucional.

En términos políticos y de partido el movimiento que se ha producido en Castilla y León también es muy relevante porque hasta ahora ninguna otra comunidad del PP se ha atrevido a llevar la contraria al Gobierno en este tema. Pero lo cierto es que precisamente el Ejecutivo de Herrera nunca ha mostrado ningún reparo en cuestionar las decisiones de Rajoy o sus ministros que no le satisfacen, aunque eso suponga quebrar el discurso del PP.

Hace sólo unos días el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, afeó a Susana Díaz que reclamara la armonización fiscal entre comunidades cuando acaba de implantar la jornada de 35 horas.